

RECURSO DE QUEJA
Q.A. 6/2017, **RELACIONADA**
CON LAS DIVERSAS:
Q.A. 5/2017, Q.A. 7/2017,
Q.A. 8/2017, Q.A. 9/2017,
Q.A. 10/2017 y Q.A. 11/2017.

QUEJOSA:

RECURRENTE:

MAGISTRADO RELATOR:

PABLO DOMÍNGUEZ
PEREGRINA.

SECRETARIO:

CARLOS FELIPE ALCÁNTARA
ORTIZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Quinto Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito,
correspondiente a la sesión de **quince de febrero de dos
mil diecisiete.**

VISTOS;

Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante oficio recibido el dos de
diciembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de

Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en
Materia Administrativa en la Ciudad de México, *****

***** ***** , por derecho propio, interpuso

recurso de queja contra la resolución dictada el veinticuatro
de noviembre del año próximo pasado, por la Secretaria del
Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de
esta ciudad, encargada del despacho por ausencia
temporal del titular, en el juicio de amparo indirecto
2318/2014.

SEGUNDO. De ese asunto correspondió conocer, por
razón de turno, a este tribunal, cuyo presidente, por
acuerdo de tres de enero de dos mil diecisiete, tuvo por
recibido el oficio de referencia, ordenó la formación del toca
Q.A. 6/2017 y admitió a trámite el recurso de queja.

Ahora bien, en razón de que diversas autoridades de
la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México;
interpusieron sendos recursos de queja en contra del
proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis,
los cuales se registraron con los números **Q.A. 5/2017,**
Q.A. 7/2017, Q.A. 8/2017, Q.A. 9/2017, Q.A. 10/2017 y
Q.A. 11/2017, respectivamente; se ordenó que el presente

asunto se turnara al Magistrado que los conociera, a fin de que se resolvieran en la misma sesión, por virtud de su estrecha relación (fojas trece y siguiente del toca en que se actúa).

TERCERO. Mediante proveído de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, se ordenó turnar el asunto al Magistrado Pablo Domínguez Peregrina, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente, en términos del artículo 101, último párrafo, de la Ley de Amparo; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver del recurso de queja, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, 98, 99, primer párrafo de la Ley de Amparo; 37, fracción III, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como lo establecido en los puntos Primero, fracción I, Segundo, fracción I, apartado 1 y Tercero, fracción I, del Acuerdo General número **3/2013** del Pleno del Consejo de

la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los distritos y circuitos judiciales en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en virtud de que se interpone recurso de queja en contra de la resolución dictada por la Secretaria encargada del despacho por ausencia temporal del titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de esta ciudad, que reside dentro del circuito en que este tribunal colegiado ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. El presente recurso de queja fue interpuesto por ***** , **por propio derecho**, a quien, en su carácter de Director General de Recursos Financieros de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, se le impuso una multa en el juicio de amparo 2318/2014, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en dicha entidad estatal, en virtud del incumplimiento a la ejecutoria de amparo.

Por lo tanto, el recurrente **se encuentra legitimado** para impugnar la multa decretada en su contra, pues ésta deberá cubrirse con su propio peculio, no así, con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno respectiva.

Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia **2a./J. 103/2014 (10a.)**, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, octubre de dos mil catorce, tomo I, página 1044, cuyo rubro y texto son los siguientes:

“PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUE IMPONE MULTA A UN SERVIDOR PÚBLICO POR NO CUMPLIR UNA EJECUTORIA DE AMPARO. El artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo establece que el recurso de queja procede contra las resoluciones emitidas después de dictada la sentencia de amparo indirecto que no admitan recurso de revisión y por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar perjuicio a alguna de las partes. Por su parte, los artículos 192, 193 y 258 de la propia ley prevén que los juzgadores federales deberán imponer multa al titular de la autoridad responsable que incumpla una ejecutoria de amparo. **Ahora, la multa en cuestión constituye una sanción para la persona física que desempeña el cargo respectivo, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate.** Así, las personas morales oficiales carecen de legitimación para interponer el

*citado recurso de queja, contra la resolución emitida en un juicio de amparo indirecto que impone multa a un servidor público por no cumplir una ejecutoria de amparo, toda vez que dicha resolución no afecta sus derechos patrimoniales, pues **la multa debe cubrirla la persona física a quien le fue impuesta en su carácter de servidor público y, por tanto, sólo éste es quien, por derecho propio, está legitimado para controvertir tal decisión**".*

TERCERO. El medio de defensa fue interpuesto por el recurrente, dentro del término de cinco días que para tal efecto establece el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, toda vez que la resolución recurrida le fue notificada el **veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis** (foja setecientos noventa y dos del legajo de copias relativo al juicio de amparo) surtiendo efectos el veintiocho siguiente, en términos del artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo.

Por lo que el plazo para la presentación del medio de defensa transcurrió del **veintinueve de noviembre al cinco de diciembre de dos mil dieciséis**, si se toma en consideración que se descuentan del cómputo los días tres y cuatro del segundo mes invocado, por haber sido sábado y domingo, inhábiles de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En tanto que el recurso de queja se recibió el **dos de diciembre de dos mil dieciséis**, tal como se desprende del sello fechador que obra a foja tres del presente toca.

CUARTO. Se agrega copia certificada del auto recurrido al toca en que se actúa, para que quede constancia del mismo.

QUINTO. Este tribunal colegiado estima innecesario el análisis de los agravios expuestos por el inconforme, en virtud de que el recurso de queja a que este asunto se refiere es **improcedente** y, por tanto, debe desecharse, al no actualizarse el supuesto de procedencia previsto en el artículo **97, fracción I, inciso e)**, de la Ley de Amparo, que invocó como fundamento.

En el caso concreto, a través del presente recurso se impugna el proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en los autos del juicio de amparo 2318/2014, en el que la Secretaria encargada del despacho por ausencia temporal del titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México determinó que, al no acreditarse el cumplimiento de la

sentencia de amparo, no obstante los diversos requerimientos de veintisiete de septiembre y cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, formulados a las autoridades responsables, a las vinculadas y a sus superiores jerárquicos, con fundamento en los artículos 192, 193, 238 y 258 de la Ley de Amparo, les impuso una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

No obstante, el acuerdo que se recurre **no causa un perjuicio irreparable al recurrente**, pues si bien a través de éste se le impuso una multa a razón de cien veces la unidad de medida y actualización, porque no realizó los actos necesarios para la ejecución del fallo protector; lo cierto es, que la afectación que pudiera ocasionarle es susceptible de repararse ya sea por el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del incidente de inejecución de sentencia o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si éste es declarado procedente por aquel, o mediante inconformidad presentada ante el primer órgano en cita; en contra del auto de cumplimiento, para que se analice la legalidad de tales medidas de apremio.

Lo anterior, así fue determinado por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, al emitir la jurisprudencia **2a./J. 178/2016 (10a.)**, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 36, noviembre de 2016, tomo II, página 1510, bajo el rubro y texto siguientes:

“RECURSO DE QUEJA. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo establece que el recurso de queja procede contra la resolución que no admita expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave pueda causar perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva. Por su parte, conforme al procedimiento de cumplimiento e inejecución de sentencia de amparo, previsto en los artículos 192 a 198 y 211 de la ley citada, el Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede analizar la legalidad de las multas impuestas a las autoridades responsables y, en su caso, dejarlas sin efectos cuando se demuestre causa justificada de retardo en su cumplimiento. De lo anterior se concluye la improcedencia del recurso de queja contra la imposición de una multa en el supuesto referido, en la medida en que no constituye una resolución irreparable en sentencia definitiva, toda vez que el perjuicio ocasionado con ello es motivo de estudio en el incidente de inejecución de sentencia, en el que se analizan el cumplimiento y la ejecución de las sentencias de amparo; máxime cuando el recurso de inconformidad constituye el medio idóneo para impugnar las multas impuestas durante el procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo indirecto contra el auto que tenga por cumplido el fallo protector”.

Así como la diversa jurisprudencia **2a./J. 159/2015 (10a)**, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable, por analogía, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, diciembre de 2015, tomo I, página 288, que establece:

“RECURSO DE INCONFORMIDAD EN AMPARO DIRECTO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVERLO CONTRA LAS MULTAS QUE SE LE IMPUSIERON DURANTE EL PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.) (*), estableció que si en amparo indirecto el cumplimiento de una sentencia protectora no satisface al órgano de amparo, sin que advierta además una actitud evasiva o que se hayan efectuado procedimientos ilegales para retrasar deliberadamente su ejecución, solamente deberá requerir de nueva cuenta a la responsable especificando cómo debe actuar, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente para la apertura del incidente de inejecución, pues esto último sólo procederá cuando detecte actos evasivos o el propósito de demorar injustificadamente el cumplimiento. Asimismo, determinó que cuando la autoridad judicial de amparo advierta que existe exceso o defecto en el cumplimiento que impida tener por cumplida la ejecutoria, ello tampoco da lugar a que se abra el incidente de inejecución respectivo, el cual eventualmente podría concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que en lugar de pretender que se sancione deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón

por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso. Como complemento de lo anterior, también dispuso en la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) (**) que aun dentro del propio incidente de inejecución es legalmente factible revocar las multas impuestas por el cumplimiento extemporáneo, cuando existan causas justificadas por las que el cumplimiento no se haya realizado dentro de los plazos legales correspondientes, concluyendo en la diversa jurisprudencia P./J. 56/2014 (10a.) (***), que: 'Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo'. Ahora bien, a partir de este último principio rector del procedimiento de ejecución de sentencias, esta Segunda Sala determina que si el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de un amparo directo impone una multa a la autoridad responsable por un cumplimiento excesivo o defectuoso y, posteriormente, al repararse esas deficiencias por la autoridad obligada, el órgano de amparo declara acatado el fallo protector, la responsable puede promover recurso de inconformidad contra esta última determinación para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la multa impuesta durante el procedimiento de ejecución porque, si no fuera así, carecería de un medio de defensa sencillo, rápido y efectivo para demostrar que no había razón para sancionarla, pues si bien la vocación natural de dicho recurso sólo es la de verificar la observancia de la protección constitucional, lo cierto es que con la declaración de que el fallo fue acatado en sus términos, habiendo conformidad de las partes, lo único que seguiría es el archivo del juicio de amparo en forma definitiva, dejándosele en absoluto estado de indefensión respecto de la sanción impuesta, no obstante que bien podría acontecer que no hubiese incurrido en los vicios que se le atribuyeron y, por tanto, que tampoco su conducta hubiese encuadrado en el supuesto jurídico que permitía la legal imposición de un medio de apremio de carácter económico".

Bajo ese contexto, como al momento de la imposición de la multa **no se ocasiona un perjuicio irreparable a la autoridad sancionada**, se considera que **no se colman los supuestos que establece el artículo 97 fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo**, para la procedencia del recurso de queja, por ende, debe **desecharse**.

Sin que obste a lo anterior, que por auto de presidencia se hubiera admitido el medio de defensa de que se trata, pues dichos autos no causan estado y el Tribunal en Pleno no está obligado a acatarlos.

Es aplicable al caso, por igualdad de razón, la jurisprudencia **1a./J. 29/2006**, sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal del país, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, julio de 2006, Tomo XXIV, página 188, la cual es del tenor literal siguiente:

“QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. DEBE DESECHARSE SI ENCONTRÁNDOSE EN ESTADO DE RESOLUCIÓN, EL PLENO DEL ÓRGANO COLEGIADO ADVIERTE QUE NO SE SATISFACEN LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA A QUE SE REFIERE DICHO PRECEPTO. El artículo 95, fracción VI, de la Ley de

Amparo, establece que el recurso de queja procede contra las resoluciones de los Jueces de Distrito, o del superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos previstos en el artículo 37 de esa ley, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 del mencionado ordenamiento y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; o contra las que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con arreglo a la ley. En ese sentido, si al momento de dictar la resolución final los integrantes del Tribunal Colegiado de Circuito advierten que la queja no satisface los requisitos de procedencia mencionados deberán desechar el recurso, sin que sea obstáculo para ello el hecho de que su Presidente lo haya admitido a trámite, ya que al momento de dictar la resolución -que es cuando se tienen todos los elementos para pronunciarse al respecto- el Pleno del tribunal está facultado para estudiar y determinar la procedencia del recurso; además, es criterio reiterado de esta Suprema Corte que los autos dictados por el Presidente de un órgano colegiado no causan estado”.

Finalmente es de resaltarse que, con esta resolución, no se aplica retroactivamente en perjuicio del recurrente la jurisprudencia **2a./J. 178/2016 (10a.)**, en que este órgano constitucional se basó para desechar el presente medio de impugnación, toda vez que esta tesis fue publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, el **veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis**, y el recurso de queja se interpuso el **dos de diciembre**

siguiente, esto es; una vez que ya era obligatorio tal criterio para este órgano colegiado de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO. Se **desecha** el presente recurso de queja.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución al juzgado de origen y en su oportunidad archívese el toca.

Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados, **Pablo Domínguez Peregrina**, Presidente, **María Elena Rosas López** y **Marco Antonio Bello Sánchez**; lo resolvió el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo relator el primero de los nombrados.

Firman los Magistrados con la Secretaria de Acuerdos, **Aurora Álvarez Plata**, quien autoriza y da fe.

* * * * *

** ***** ** ***** ** ***** ***** ** ***** ** ***** **
 ***** ** ***** ** ***** ***** ***** ** ***** ***** ** ***** *
 ***** ** ***** ** ***** ***** ***** * ***** ** ***** ** *****
 ** ***** * ***** ***** ***** ***** ** ***** ** ***** ***** **
 ***** ** ***** ***** ***** ** ***** ** ***** ** ***** *****
 ***** ***** ** ***** ***** ***** ***** ** ***** ***** *****
 ** ***** ** ***** ***** ***** ***** ***** ***** * *****
 ** ***** ***** ** ***** ***** ** ***** ** ***** ** ***** *****
 ***** ** ***** * ***** ***** ***** ***** ***** ** ***** **
 ***** ***** ** ***** ** ***** ***** ***** ***** ***** ** *****
 ***** ** ***** ** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ** ***** ** ***** *****

PJF - Versión Pública

El licenciado(a) Carlos Felipe Alcántara Ortíz, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento mencionado. Conste.

PJF - Versión Pública